



El Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, hoy veintiuno de junio de dos mil diecinueve, tiene vistos los autos del Procedimiento Administrativo al rubro citado para resolver en definitiva:

RESULTANDO

1. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN. La instrucción del presente procedimiento administrativo se originó con el oficio FGR/VG/DGETJ/0825/2019, suscrito por Rafael Contreras Labra, Director General de Evaluación Técnico Jurídica en la Visitaduría General de la Institución quien remitió la Vista Administrativa VIS/203/2019, para determinar respecto a la probable responsabilidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] por omisión de diligencias del 25 de enero de 2012 al 15 de abril de 2016, dentro de la averiguación previa AP/PGR/MEX/TOL-V/1031/2008 y con ello actualizar presuntamente las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, VI y XI del artículo 62, así como la fracción XVII del diverso 63, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos).

2. EMPLAZAMIENTO. Dentro de las constancias que integran el presente procedimiento disciplinario no obra evidencia que indique que [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] hayan comparecido al presente disciplinario, sin embargo, toda vez que con la presente determinación no se causa perjuicio alguno a los servidores públicos relacionados, resulta totalmente irrelevante su llamado a la presente instrucción, máxime que resultaría ocioso su emplazamiento porque en nada cambiaría el sentido de la presente resolución.

3. SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En el presente procedimiento disciplinario se observaron los derechos intraprocesales de Seguridad Jurídica y

Debido Proceso de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] y [REDACTED] agentes del Ministerio Público de la Federación, entonces adscritos a la Agencia Tercera Investigadora en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Mediante proveído de tres de junio de dos mil diecinueve, se ordenó reservar el presente procedimiento para resolver en definitiva, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento del Servicio de Procuración de Justicia Federal y en relación al Tercero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, por lo que:

CONSIDERANDO

I.- COMPETENCIA. Soy competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114 párrafo III, 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Tercero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; artículo 10 párrafo segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y por estar formulada la queja de origen en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento).

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Tesis: 2a. /J. 156/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL INVESTIGADORA, ASÍ COMO PERITOS ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SE RIGE POR LA LEY ORGÁNICA DE ESA INSTITUCIÓN Y EXCEPCIONALMENTE POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU APLICACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES DE LA PROPIA PROCURADURÍA. En términos de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los principios de supremacía constitucional, legalidad y aplicación preferente de la norma especial, la naturaleza de las funciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Investigadora y de los peritos adscritos a la Procuraduría General de la República, los sujeta al régimen de responsabilidades administrativas previsto específicamente para ellos en los capítulos VIII y IX de la ley orgánica de esa dependencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002, vigente hasta el 29 de mayo de 2009, denominados "De las causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos" y "De las sanciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos", los cuales establecen las causas de

responsabilidad así como las autoridades competentes para instaurar los procedimientos administrativos y emitir las resoluciones respectivas, en el orden siguiente: I. El Procurador General de la República; II. Los Subprocuradores; III. El Oficial Mayor; IV. El Visitador General; V. Los Coordinadores; VI. Los Directores Generales; VII. Los Delegados; VIII. Los Agregados, y IX. Los titulares de las unidades administrativas equivalentes, tratándose de las sanciones de amonestación pública y privada, así como suspensión y a petición de cualquiera de ellos, el Consejo de Profesionalización del Ministerio Público de la Federación podrán decretar la remoción. Por tanto, el régimen general establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sólo es aplicable a los servidores públicos mencionados por excepción, cuando eventualmente su estatuto orgánico especial remita a aquél y no exista incompatibilidad en su aplicación.

Contradicción de tesis 280/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.

II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Los procedimientos administrativos disciplinarios tutelan los principios consagrados en los artículos 21 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben existir en el servicio público por lo que es de pronunciamiento forzoso, pues su materia la constituye la conducta de los servidores públicos en funciones respecto de la cual existe el interés general en que se determine si es contraria a los deberes y obligaciones del servicio público.

Sin embargo, el estudio de los presupuestos procesales, constituyen cuestiones de orden público, y por tanto, su estudio es preferente y de oficio, consecuentemente es pertinente advertir que en la presente instrucción y de acuerdo al estudio minucioso en el expediente de mérito, la facultad sancionadora se encuentra prescrita.

Ahora bien, la imputación que obra contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] por omisión de diligencias del 25 de enero de 2012 al 15 de abril de 2016, dentro de la averiguación previa AP/PGR/MEX/TOL-V/1031/2008, eventualmente pudo ser constitutiva de responsabilidad administrativa prevista en las fracciones I y VI y XI del artículo 62, así como la fracción XVII del diverso 63, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos).

En este contexto tenemos que para decretar una responsabilidad administrativa deben de colmarse al menos tres supuestos a saber:

- a) Que exista una probable responsabilidad sancionable en grado administrativo.
- b) Que la facultad sancionadora del Estado se encuentre vigente y;
- c) La existencia de un probable infractor.

En esos términos, el primero de los requisitos, es decir la posible infracción a un principio rector del servicio público, se encuentra acreditado en el sumario que se resuelve, en términos del oficio FGR/VG/DGETJ/0825/2019 de quince de abril de dos mil diecinueve, signado por Rafael Contreras Labra, Director de Evaluación Técnico Jurídica de la Visitaduría General de la Institución, presentó la vista VIS/203/2019 como Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica (vigente al momento de los hechos) contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED]

Si bien es cierto lo anterior, también lo es que no puede hacerse un juicio apriorístico de que si la conducta descrita en el oficio de que se trata, constituye una responsabilidad administrativa al menos indiciariamente con la presentación de la vista de mérito, puede tenerse por satisfecho el primero de los requisitos.

Ahora bien, y a efecto de verificar si se satisface el segundo de los requisitos debemos analizar lo siguiente,

En este orden de ideas, después de un análisis a las constancias que integran el disciplinario en que se actúa, al constituir los presupuestos procesales cuestiones de orden público de previo y especial pronunciamiento debe agotarse su estudio de manera preferente, en virtud de advertirse actualizada la prescripción de la facultad sancionadora en el presente caso, a favor de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED]

Ahora bien, para el caso de que si la facultad sancionadora se encuentre en estado de vigencia, es necesario hacer un análisis que nos explique tanto la ley a la que debe sujetarse la presente resolución, como el computo de la temporalidad en que se realizó la infracción atribuida a los instrumentados, la interrupción de sus posibles plazos y la posible prescripción de la permisibilidad sancionadora que establece la Ley.

En esos términos, los principios generales en materia de responsabilidades administrativas se encuentran expedidos en diversas Leyes, en atención a la naturaleza de las funciones desempeñadas por diversos órganos del Estado, es decir, los sistemas de responsabilidades especiales como en su caso los comprendidos en el capítulo VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, (vigente al momento de los hechos) complementan el mecanismo general previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Lo anterior, es así, toda vez que si bien es cierto el artículo 123, apartado "B" fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias Leyes, conformando así un mecanismo específico de responsabilidad, dicha especialidad no escapa de los alcances del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso con la vinculación con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Consecuentemente las facultades sancionadoras del Titular de ese Órgano Desconcentrado previstas en el artículo 62, fracción VII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos), no pueden asumirse indefinidas, fundando el criterio en que la reglamentación adjetiva especial (Ley Orgánica de la Institución) no contempla como figura "la prescripción", pues asumir como cierta dicha premisa sería violatoria de garantías y haría nugatorio la limitación al poder sancionador que prevalece en cualquier Estado de Derecho, ya que tratándose de conductas con mayor relevancia de lesividad social como lo son las figuras delictivas, la propia Ley de la materia establece plazos y términos para poder sancionar el hecho penalmente relevante, imposibilitando el ejercicio de la acción penal de la condena o de la ejecución de la sanción por el simple transcurso del tiempo; con mayor razón no puede asumirse como cierto el que la sanción de las responsabilidades administrativas quede vigentes ad perpetuam.

Para esos términos debe acudir necesariamente a la Ley general como garante de una norma de criterio que evita cómputos parciales, arbitrarios e injustos.

Corolario a lo anterior, las facultades de las autoridades de la Fiscalía General de la República, para sancionar a sus agentes del Ministerio Público, deben

prescribir en los términos de la Ley que establece el Instituto jurídico de la caducidad, a saber la Ley General de Responsabilidades Administrativas .

Tiene aplicación por identidad jurídica, la Tesis que a continuación se cita.

Época: Novena Época Registro: 166952 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Julio de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A.639 A Página: 1924

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA SANCIONAR A SUS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE DICHA INSTITUCIÓN VIGENTE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2002. PRESCRIBEN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE RIGIÓ EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE MARZO DEL CITADO AÑO.

En la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2001-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 700, se determinó esencialmente, que en el ámbito federal el Congreso de la Unión estableció los principios generales de la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la ley federal relativa y, en atención a la naturaleza de las funciones desempeñadas por diversos órganos del Estado, expidió leyes con capítulos especiales sobre el tema, en las cuales fueron desarrollados diversos procedimientos para indagar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de esas disposiciones y afirmó que, de ese modo, los sistemas de responsabilidades especiales complementan en materia sustantiva el mecanismo general y, en materia adjetiva, pueden excluir la aplicación de algunas de las normas previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Asimismo, precisó que de los artículos 50 a 58 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente hasta el 27 de diciembre de 2002, se advierte que el legislador federal, considerando la ubicación constitucional de esa institución del Poder Ejecutivo y las particularidades especiales de las atribuciones que corresponde ejercer a los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y a los peritos, dispuso en la aludida ley orgánica, por una parte, la aplicación de la citada Ley Federal de Responsabilidades a todos sus trabajadores, sin considerar excepción alguna y, por la otra, conformó un mecanismo específico de responsabilidades que rige únicamente para los primeramente señalados. Finalmente, en la ejecutoria examinada se concluyó que dicho mecanismo conforma una reglamentación del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente de su artículo 113; de ahí que es complementario del sistema general, por establecer obligaciones nuevas y precisas para determinadas categorías de servidores de esa dependencia, cuyo incumplimiento se sanciona conforme a las normas que rigen el procedimiento respectivo. Consecuentemente, las facultades de las autoridades de la Procuraduría General de la República para sancionar a sus agentes del Ministerio Público, prescriben -en realidad se trata del instituto jurídico sustantivo de la caducidad- en los términos establecidos en el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que rigió en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, al existir una laguna sobre el tema en la invocada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en tanto que esa figura

jurídica pertenece al sistema general de responsabilidades; además, este criterio es acorde con el último párrafo del artículo 114 de la Constitución Federal.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 84/2009. Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de esa institución. 8 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

En este tenor tenemos que la conducta objeto de reproche contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] consiste en la omisión de diligencias del **25 de enero de 2012 al 15 de abril de 2016**, dentro de la averiguación previa AP/PGR/MEX/TOL-V/1031/2008, por lo que la prescripción de la facultad sancionadora empezó a correr a partir del día siguiente, es decir el **16 de enero de 2016**, y feneció el término de tres años a que alude el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el **16 de enero de 2019**.

Ahora bien, debe ponderarse que la solicitud de queja que formuló esta Delegación estatal fue recibida desde el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por la Dirección General de Evaluación Técnico jurídica, y es hasta el quince de abril de dos mil diecinueve que se recibió el oficio por el que se formuló la queja en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente en la época de los hechos), por lo que transcurrieron diez meses con veinte días en estudio de la Dirección antes referida, lo que imposibilitó instruir el presente procedimiento Administrativo.

Ante tales circunstancias, es incuestionable, que el término de la prescripción establecido en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha transcurrido con demasía, por lo que ha operado en favor de los instrumentados [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] la liberación de la obligación a responder por la probable responsabilidad administrativa que se le atribuyó.

En ese sentido la facultad sancionadora de la autoridad administrativa como ente jurídico se encuentra justificada sólo para el caso de que exista una infracción con carácter administrativo y sólo así será procedente y legítima la imposición de una sanción, tendente a mantener el orden de las instituciones cuya función se encuentra vinculada con la seguridad pública y en el caso en particular de la

Fiscalía General de la República, por lo que al no actualizarse las hipótesis contenidas en los artículos 62, fracciones I, XI, y 63, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (vigente al momento de los hechos), y atento al principio de legalidad y seguridad jurídica que debe prevalecer en toda resolución de autoridad se concluye que no existe responsabilidad administrativa que sustente la imposición de una sanción, por lo que por los motivos expuestos en la presente resolución, por lo que se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara prescrita la conducta objeto del presente procedimiento seguido contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] agentes del Ministerio Público de la Federación, entonces Titulares de la Agencia Quinta Investigadora en Toluca de Lerdo, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y [REDACTED] agentes del Ministerio Público de la Federación, y mediante oficio, al Titular de la Visitaduría General, al Titular del Órgano Interno de Control de la institución, al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al Director General de Recursos Humanos, al Director General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal y al Subdelegado Administrativo de esta Delegación Estatal de la Institución para los efectos legales correspondientes y archívese el expediente por estar concluido.

LIC. RACIEL LÓPEZ SALAZAR
DELEGADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE MÉXICO



PROYECTÓ

[REDACTED]

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, clasifica como información reservada lo siguiente:

- Los sujetos que intervienen en la carpeta de investigación (testigos, imputados, datos sensibles, entre otros).
- Domicilios, correos electrónicos, teléfonos, y demás información de las personas que intervienen en la carpeta de investigación, que generó el Procedimiento Administrativo.
- Información del personal sustantivo que participa en la resolución de los Procedimientos.

Toda vez que divulgar dicha información pondría en riesgo la vida, seguridad e integridad física de las personas que intervienen en la averiguación previa, así como de los servidores públicos que realizan las actividades sustantivas.